



INFORME COMUNICACIONES DICIEMBRE DE 2023



El diccionario Merian Webster eligió como la palabra del año el término “auténtico”, pero muchos analistas eligen para Chile el término “cansancio”, por el sentimiento que pareció caracterizar este fin de año en el país luego del proceso constitucionales que culminó el 17 de diciembre con el triunfo del “en contra” por 55,6% sobre el 44,24% del “a favor” en el plebiscito sobre la propuesta constitucional, y que terminó legitimando la Constitución que nos rige actualmente, luego de cuatro años de debate, dos procesos y dos rechazos.

“Fue un fracaso monumental del país, con un desgaste y deterioro enorme, que termina un proceso exactamente en el punto de partida, con un horizonte de incertidumbre jurídica hacia el futuro”, afirmó Max Colodro, mientras para Ascanio Cavallo el resultado fue una reivindicación de los 30 años de la Concertación, al legitimar los cambios que introdujo a la Constitución de los 80 la administración de Ricardo Lagos, y para Pablo Ortúzar, una oportunidad perdida- por luchas políticas de las élites- para lograr un pacto social en el país. Aunque nadie salió a celebrar, La Moneda recibió este rechazo como una oportunidad para retomar la agenda y superar el desgaste del gobierno provocado por el caso convenios, las malas cifras económicas, la crisis en materia de seguridad y el escaso avance en las reformas estructurales que prometió la administración Boric al país.

Con un llamado a lograr acuerdos en los temas que hoy afectan a los ciudadanos, el mandatario abrió un debate al interior de la oposición entre los sectores que prefieren endurecer su relación con el gobierno versus los que quieren abrir espacios para llegar a acuerdos, en temas como las pensiones y la reforma tributaria, y de esta manera adelantó una estrategia con miras a la elección municipal de 2024 y la presidencial y parlamentaria de 2025. La decisión de José Antonio Kast de anunciar su voluntad de ir a la carrera presidencial, sin reconocer una derrota en el plebiscito y reafirmando la vigencia de los contenidos republicanos en la propuesta constitucional, dibujaron un nuevo escenario complejo con Chile Vamos y una amenaza a la posibilidad de alcanzar pactos en las próximas elecciones, en tanto que el perfilamiento de la ex presidenta Michelle Bachelet durante la campaña a favor del “en contra” en el plebiscito la han puesto nuevamente como carta presidencial, adelantando de este modo la futura contienda por el sillón de La Moneda.

En medio de este deterioro del debate político y el aumento de la brecha entre los intereses de los partidos políticos y la ciudadanía, detectada en todas las encuestas, el nuevo arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Chomalí, hizo una dura crítica a la clase política, señalando que el nivel de beligerancia que existe en el debate es “intolerable”, y llamando a un gran acuerdo nacional, “porque si no, no sabemos en qué va a terminar esto”.

La encuesta CADEM de diciembre señaló que el 60% de los chilenos considera que la delincuencia debería ser la principal prioridad en el 2024, seguida por la economía. Esta prioridad se explica por el aumento del crimen organizado durante 2023 y la sensación de inseguridad de la ciudadanía, que alcanzó según la Encuesta ENUSC al 90, 6% en el país. Según datos de la PDI, hasta el 24 de diciembre el país registraba 804 homicidios, de los cuales 497 ocurrieron en la Región Metropolitana. La presencia en el país de agrupaciones internacionales, como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, entre otros, hizo crecer el tráfico de drogas, el uso de armas de alto calibre, las extorsiones y la irrupción del secuestro y el ajusticiamiento por enfrentamientos entre bandas rivales. El gobierno ha enfrentado esta nueva realidad con una Política Nacional contra el Crimen Organizado, que comprende la creación del ministerio de Seguridad, una nueva ley de inteligencia y una treintena de proyectos. Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición y también del oficialismo se ha pedido recurrir a medidas más extremas, como Estados de Excepción en algunas comunas de la RM y del país.

En materia económica, en un año marcado por el estancamiento de la economía, la caída en la inversión y mayores regulaciones, el acuerdo entre SQM y Codelco que transforma a la estatal cuprífera en socia y controladora (50% más una acción) de la operación del salar de Atacama para la explotación del litio hasta 2060, fue considerada por el oficialismo como una noticia “histórica”. El acuerdo, que permite la extracción de 300.000 toneladas de metal blanco entre 2025 y 2030, cuando vence la actual concesión a SQM, generó críticas incluso en sectores cercanos al gobierno por la vinculación de la empresa privada a Julio Ponce Lerou, uno de los acusados por el financiamiento irregular de la política.